



**Al Señor Jefe del Bloque La Libertad Avanza de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Dr. Gabriel Bornoroni**

Preocupa que el segundo párrafo del texto propuesto para el artículo 20 antes citado disponga la configuración de manera objetiva de la “pluspetición inexcusable” -habilitante de la responsabilidad solidaria del/de la letrado/a para el pago de costas- correlación a la sobreestimación de créditos reclamados. La ambigüedad de cuando estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el/la profesional actuante, quien ejerce la defensa

técnica en procura del reconocimiento de derechos. Cabe recordar que ya existen normas procesales que permiten sancionar a la temeridad o malicia en el desempeño profesional y que introducir esta norma sólo respecto de los laboristas supone una discriminación no aceptable en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho.

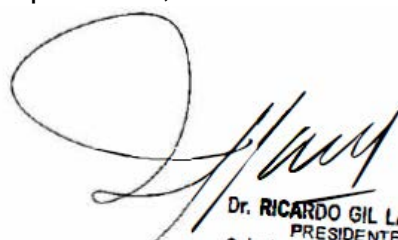
Parecida situación presenta el texto proyectado del artículo 277 que establece -diferencialmente- la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados/as, todos ellos de naturaleza alimentaria. Contrariando los principios y normas de Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos de índole laboral, se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos.

Por otra parte, el mismo texto reproduce la limitación para la responsabilidad del pago de costas prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual -en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744- se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia.

Por último, aún cuando podría ser deseable la introducción del “stare decisis” en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales.

Con base en las razones expuestas, solicitamos a los/as señores/as Diputados/as que, en su análisis, consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social.

Sin otro particular, lo saludo con atenta y distinguida consideración.



Dr. RICARDO GIL LAVEDRA
PRESIDENTE
Colegio Público de Abogados
De la Capital Federal